

# Cien días de revolución en Venezuela

Raúl González Fabre, SJ\*

**C**UANDO escribimos estas líneas se cumplen exactamente cien días de presidencia del comandante Hugo Chávez Frías en Venezuela. Siendo éste un país de constitución política presidencialista, se trata también de cien días de gobierno. Pero lo que ha llamado la atención del mundo no es el manejo ordinario de los asuntos públicos del país latinoamericano, sino el intento de hacer la revolución política desde el poder, llevado adelante por un joven líder militar, carismático y de indudable sintonía con el pueblo. Recontaremos aquí las grandes líneas de la revolución venezolana en curso y trataremos de identificar sus potencialidades y riesgos.

## Enterrando un sistema político

«**J**URO ante Dios, ante la Patria y ante mi pueblo, sobre esta moribunda Constitución, que haré cumplir e impulsa-

\* Miembro del Consejo de Redacción de la *Revista SIC*. Caracas (Venezuela).

ré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos». Con esta peculiar fórmula juró Chávez su cargo, delante de una docena de presidentes latinoamericanos y del príncipe Felipe, en el escenario más solemne de esta república joven y poco dada a protocolos.

La respuesta de Chávez no respondía en realidad a la pregunta ritual del presidente del Congreso sobre si juraba cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Pese a su problematicidad *jurídica*, la validez *política* del juramento era sin embargo incuestionable: Chávez fue explícitamente elegido para enterrar un sistema político —el de la Constitución de 1961— y para dar lugar a algo nuevo. En diciembre de 1998, 56 por 100 de los votantes le respaldaron (un millón de votos por delante de la alianza de los grandes partidos del sistema en su contra). Hoy las encuestas le atribuyen una popularidad en torno al 85 por 100, la más alta alcanzada nunca por un presidente venezolano.

Tanto apoyo popular a la idea de enterrar un sistema político que fue tenido por ejemplo de la democracia en América se funda en las mismas promesas que el sistema logró introducir en el alma popular durante los primeros veinte años de su existencia (1961-1982), pero que fracasó en cumplir durante los últimos quince (1983-1998): igualdad de los venezolanos ante la ley, modernización económica, inclusión social, dignidad nacional.

En vez de liderar los cambios necesarios para mantener la legitimidad política del sistema cuando las circunstancias económicas se torcían, las elites dirigentes se entramparon en intereses creados, derechos mal adquiridos, ineficiencias patentes y corruptelas escandalosas, que dificultaron o bloquearon el camino de las reformas durante la última década y media. Como consecuencia, la exclusión social se ha acelerado en una medida difícilmente concebible desde Europa. Por sólo poner un ejemplo, la pobreza total se ha duplicado entre 1982 y 1997 (de 33,5 por 100 de la población a 67,2 por 100), mientras la pobreza crítica se ha más que triplicado en el mismo período (de 11,0 por 100 a 36,3 por 100 de la población) (1). Las familias en pobreza crítica son las que con su ingreso no alcanzan a comprar una cesta alimenticia mínima de 2.000 calorías por persona y día. Ello significa que hoy más de un tercio de la población venezolana pasa hambre.

No es raro que al final las mayorías acabaran por pensar que no tienen vía de futuro dentro del sistema actual, y buscaran al candidato con más probabilidades de cambiar las cosas de raíz: precisamente el que lo había inten-

(1) Matías Riutort: «Pobreza y desigualdad en Venezuela». *Revista SIC*, n.º 614, mayo, 1999, p. 156.

tado por las malas en 1992, dirigiendo el asalto fallido al Palacio Presidencial a la cabeza de sus paracaidistas.

## La vía constituyente

SI el golpe de Estado del año 92 fracasó militarmente, su éxito político fue indudable: forzó la destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993 y movió la línea de gobierno hacia la izquierda durante la presidencia de Rafael Caldera (1994-1999). Lo que no pudo hacer fue el milagro de que los grandes políticos y sus aliados en las elites nacionales impulsaran las reformas requeridas a la velocidad precisa. El gobierno Caldera intentó todas las reformas básicas, pero su apego a las reglas del juego de la Constitución de 1961 bloqueó algunas y demoró otras, de manera que para el momento de las elecciones de 1998 la población no había sentido ningún efecto palpable de lo avanzado.

La conclusión lógica fue sacada por la gente sin gran dificultad: si las reformas no son posibles dentro de la Constitución vigente, porque resultan ralentizadas o bloqueadas por el Congreso, la Corte Suprema y los sindicatos de funcionarios públicos, organismos todos bajo control de los partidos del sistema, entonces que caiga la Constitución. Por eso la vía elegida por Chávez para su revolución ha sido la convocatoria de una Asamblea Constituyente originaria, que esté por encima de todos los poderes constituidos. El 25 de abril un referéndum aprobó la convocatoria a la Constituyente por mayoría aplastante (89 por 100 aunque con alta abstención), y el 25 de julio tendrán lugar las elecciones de los miembros de la Asamblea, por un sistema uninominal mixto de representación regional y nacional. La Constituyente deberá trabajar durante seis meses como máximo para redactar una nueva Constitución, que luego será sometida a aprobación popular por referéndum.

Si estas elecciones resultan en mayoría para los partidarios de Chávez, la primera medida de la Asamblea (ya anunciada por el presidente) podría ser la disolución del Congreso y de la Corte Suprema. Ello supondría una crisis institucional severa, puesto que la Corte niega a la Asamblea Constituyente el carácter originario, de tal manera que según la Corte la disolución de los poderes constituidos sólo sería posible después de la aprobación en referéndum de la nueva Constitución, no antes. Como resulta claro en una situación así, a la hora de la verdad el argumento de inconstitucionalidad pesará poco (al fin, se trata de sustituir una Constitución que no ha sido jurada por

el presidente) y la confrontación se planteará en el terreno de la legitimidad política, donde Chávez tiene todas las de ganar.

Dos incógnitas grandes pesan sobre el proceso constituyente en sí mismo. La primera, qué Constitución quiere el presidente. Los puntos de fondo más claros que ha enunciado hasta ahora se refieren a: disminuir el poder de los partidos políticos, particularmente en el sistema judicial; forzar las elecciones por la base en todos los niveles de los sindicatos y los gremios patronales; aumentar la injerencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública; y establecer la reelección presidencial inmediata por un período adicional.

El cuadro es evidentemente ambiguo. Los dos primeros puntos van en la dirección de mayor democratización, mientras que los dos segundos poseen claro sabor autoritario en la tradición política venezolana. Pero aparte estas grandes líneas, los portavoces de los partidos que respaldan a Chávez han hecho todo tipo de sugerencias, muchas extravagantes y contradictorias. La duda de fondo es si se trata de alterar la Constitución política del país para darle una estructura más democrática, o simplemente para desplazar unos grupos del poder y sustituirlos por otros dentro de una estructura parecida a la anterior.

La segunda incógnita se refiere a la estabilidad de la Constitución que nazca de la Asamblea. Chávez no quiere pactar con los grandes partidos tradicionales (ahora bastante menos grandes que otrora) ni con las elites a ellos asociadas ni con los sindicatos, sino arrollarlos apoyado en el pueblo, en las Fuerzas Armadas, y en diálogo con el empresariado y la Iglesia. Si sus partidarios logran la mayoría absoluta en la Asamblea, lo que es perfectamente posible, no necesitará negociar la nueva Constitución sino que podrá imponerla. Pero si la Constitución no nace de un pacto sino de una victoria, los derrotados tomarán como su primer objetivo político abolirla.

De esto hay precedentes en Venezuela. Cuando en 1945 el partido Acción Democrática y los militares jóvenes depusieron al general Medina Angarita de la Presidencia, procedieron a elaborar una Constitución a su medida, que impusieron a los demás sectores de la vida nacional con una mayoría aplastante de votos. La Constitución del año 47 duró en vigencia hasta el 48, cuando los sectores marginados por ella y los militares que se habían separado de la alianza con Acción Democrática dieron un golpe de Estado. Por eso en 1958, al llegar de nuevo Acción Democrática al poder tras diez años de dictadura, no quiso usar su mayoría para volver a la antigua Constitución, sino que se elaboró una nueva a partir de un muy amplio pacto político. Habían aprendido la lección.

Nadie sabe en este momento si el presidente Chávez también la habrá aprendido o si más bien, como parece, ha elegido la vía de la confrontación incluso para redactar la Constitución. El riesgo entonces sería muy grande para la estabilidad del país a largo plazo, puesto que la opinión popular puede cambiar fácilmente de dirección, las Fuerzas Armadas están divididas respecto a la apreciación del presidente y al papel que les toca en el futuro, y los empresarios y la Iglesia son si acaso apoyos dialogantes y críticos, no aliados.

Un cierto grado de confrontación institucional, sin embargo, será inevitable, puesto que los intereses atrincherados en algunas instituciones clave son muy poderosos. El parto de un nuevo régimen político no será sin dolor, ni siquiera por la vía democrática asumida por Chávez. De lo que nadie tiene duda, ni siquiera los más férreos adversarios del presidente, es de que el enterramiento del régimen anterior ya ha sido cumplido. No hay vuelta posible a la Constitución de 1961. Por eso, quienes se opusieron con vigor a la Asamblea por inútil o contraproducente, ahora preparan para asombro de muchos sus candidaturas a padres de la nueva Constitución.

## Los temores de las clases medias

**L**AS revoluciones políticas raramente gustan a quienes están instalados en el poder económico o en otras posiciones de preeminencia social. La revolución venezolana, encabezada por un presidente de origen popular (sus padres son maestros), de raza indígena evidente, de extracción militar y de gestos populistas, tampoco podía resultar del agrado de las clases medias profesionales y comerciales. Éstas han venido adelgazándose considerablemente durante la crisis, pero los que quedan, quienes han conseguido salvar aproximadamente su nivel de vida, temen que la inestabilidad de un proceso fuera de sus manos acabe por enterrarles.

Como consecuencia de ello, se desarrolló desde la misma campaña electoral una férrea oposición a Chávez, que no ha dejado de utilizar ningún recurso de la guerra sucia. Particularmente se le ha querido pintar como un segundo Fidel Castro, pero en loco, dispuesto a implantar una dictadura colectivista en Venezuela. Como los dueños de los medios de comunicación pertenecen a la gran burguesía, y los periodistas y creadores de opinión a la clase media más temerosa, estas imágenes y otras semejantes han corrido mucho, agudizando la sensación de inestabilidad. También han formado parte de la imagen proyectada afuera del país. El mismo presidente ha con-

tribuido a ello con su estilo desenfadado, su sinceridad brutal, y con algunos gestos de provocación, tales como nombrar a un comunista en el ministerio del Interior, dar un mitin junto con Fidel el mismo día de su toma de posesión, escribir una afectuosa carta al conocido terrorista venezolano Carlos (a) El Chacal, votar contra la posición americana en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o negarse a desalojar por la fuerza a los invasores de tierras.

En un país donde la ideología pesara algo, estos gestos resultarían en efecto muy significativos sobre las intenciones del gobierno. Pero no es el caso de Venezuela. Conforme la semanas han ido pasando, el país va comprendiendo que tenemos un presidente «posmoderno», que no le pide mayor coherencia a las acciones con los gestos o las palabras. Los invasores de tierras se retiran por las buenas; la bolsa sube; la política económica se mantiene dentro de la línea ortodoxa del gobierno anterior; Venezuela recupera una posición de liderazgo en la OPEP y empuja hacia arriba los precios del petróleo; las reservas internacionales se recuperan tras el primer susto y la devaluación se aleja; la lucha contra la corrupción cobra fuerza hasta ahora desconocida; el choque institucional no llega a la ruptura; hay completa libertad de prensa; Estados Unidos apoya públicamente el proceso venezolano... No puede decirse que el presidente no gobierne, o que lo haga alocada o tiránicamente.

Los recelos, incluso la inquina de las clases altas y medias contra un presidente que no es de los suyos, permanecen. Pero los temores irracionales a la dictadura bolchevique o a tener un loco en el poder han sido disipados por los hechos. Pese a lo que proyecten algunos medios de comunicación internacionales, más ávidos de espectáculo que de verdad, no hay que buscar por ahí los peligros de esta revolución, sino en estratos más profundos del alma política venezolana.

## La esperanza de las masas

LA fuerza política del presidente no se apoya en la coacción sino en la seducción que es capaz de desplegar durante sus largas alocuciones televisivas al país. Según mencionamos arriba, en el trasfondo de su popularidad se halla la esperanza de las masas populares venezolanas acerca del cumplimiento de la promesa populista que subyacía a la Constitución de 1961. Parte de esa promesa, la que dependía de la disponibilidad de renta petrolera abundante para repartir, es abiertamente

inviabile, como cada vez más gente reconoce incluso entre los pobres. No hay vuelta a la «Venezuela Saudita» de finales de los 70.

Pero queda otra parte de la promesa populista que no está en el reino del imposible. La igualdad ante la ley, una razonable eficiencia de las instituciones públicas, la transparencia democrática de los poderes y las organizaciones sociales, la responsabilización efectiva del Estado sobre la integración social, una estructuración incluyente de la economía... todo ello forma parte de la esperanza política puesta en Chávez por la gente.

A fin de cumplir con semejante tarea, el presidente pidió al Congreso una amplísima habilitación para legislar por decreto en materias de administración pública, finanzas, hacienda y economías sectoriales. Tras una violenta confrontación política con el Legislativo, de mayoría opositora, éste acabó cediendo. Ahora Chávez posee la potestad de reforzar el Estado casi por entero, sin necesidad de esperar a la nueva Constitución. Y aquí, en esta acumulación de poder, se encuentra precisamente el mayor riesgo que los analistas encuentran en el actual proceso revolucionario venezolano: que las mayorías sientan sus esperanzas defraudadas y retiren su confianza al presidente incluso antes de que el cambio político llegue a plasmarse en una nueva Constitución. A quien lo puede todo, no le quedan excusas si no tiene éxito.

Los comienzos del actual período de gobierno han sido duros para la gente. Se venía ya de un año de retracción de la economía. Entre la inestabilidad política y la baja de los precios del petróleo a comienzos de 1999, la inversión tanto pública como privada ha desaparecido prácticamente y el desempleo ha crecido del orden de un 4 por 100 en estos cien días. La política fiscal firme del Gobierno ha mantenido la inflación controlada, pero al precio de no hacer concesiones para estimular la economía. Como consecuencia, el consumo ha caído en torno a un 9 por 100 en tres meses: muchas familias que hasta hace poco no tenían dificultades para comer, ahora las tienen.

Mientras tanto, el área social del Gabinete (educación, salud, saneamiento, trabajo, asistencia) es con diferencia la más débil, falta de presupuesto, de líderes con visión, de programas. Se ha suspendido buena parte de lo mucho que el Gobierno Caldera llevaba avanzado en ese terreno (el que más cuidó), se han disuelto equipos, se han perdido saberes institucionales acumulados, sin proponer más que un sustituto muy pobre: un plan cívico-militar de asistencia social más destinado a mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas que a tener un impacto real sobre las oportunidades de subsistencia de la población en pobreza crítica.

La esperanza de las masas, confusa y a menudo contradictoria como suele ser, resulta al mismo tiempo el motor de la revolución venezolana y la espada que pende sobre ella. Se ha dicho, no sin tino, que el Gobierno Chávez es muy de izquierda en lo político, muy de derecha en lo económico, y nulo en lo social: un cóctel explosivo si la magia del flautista llegara a fallar antes de que los cambios institucionales empiecen a dar resultados palpables en la vida de la gente. La revolución venezolana, como se ha delineado en estos cien días de gobierno, consiste en una apuesta arriesgada que un líder joven y muy audaz ha planteado al país: que es posible mantener la seriedad económica sin volver al populismo; al mismo tiempo hacer un cambio político radical que mejore la eficiencia del Estado, alterando el balance de poderes y saneando la institucionalidad a través de una nueva Constitución; y al término del proceso, recoger los frutos en bienestar social y regeneración de la convivencia pública.

La paciencia del pueblo venezolano hacia sus gobernantes viene siendo muy corta en los últimos años. Con las clases medias y altas agresivamente contra el programa político radical del presidente, si el pueblo por decepción con los resultados sociales le retira la confianza antes de que ese programa sea realizado por completo, dos o tres años, lo peor de la inestabilidad en Venezuela no se habrá visto todavía. Por el contrario, si el presidente consigue mantener la cohesión popular detrás de su proyecto y liderar la travesía del desierto sin titubeos, efectivamente del otro lado puede haber una nueva república, deslastrada de muchos bloqueos internos que hundieron a la que en Venezuela suele nombrarse ahora como «la moribunda».